

Escocia tras las elecciones: ¿de las urnas a los tribunales?

[Aleksandar Kocic](#)



Tras las elecciones en Escocia que han dado la victoria al Partido Nacional Escocés, ¿qué opciones se abren a un posible segundo referéndum de independencia?

¡Han conseguido 64 escaños! Pero no 65. Ese escaño que los nacionalistas no han conseguido en el Parlamento Escocés va a ser el centro de un debate feroz para decidir si Escocia debe celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia. El Partido Nacional Escocés (SNP) ha obtenido un nuevo mandato de cinco años en el gobierno, por cuarta vez consecutiva. Logró 64 de los 129 escaños en Holyrood. Con el apoyo de los Verdes, que son independentistas y obtuvieron ocho escaños, tendrían una cómoda mayoría. Cuando se celebren las próximas elecciones, programadas para 2026, el SNP habrá estado en el poder 19 años.

En el sistema electoral escocés, la votación consiste en dos partes: los votantes escogen entre candidatos individuales, con un sistema de mayoría simple, y también declaran sus preferencias entre las listas de los partidos regionales mediante un sistema de representación proporcional. Este último aspecto funcionó y produjo un Parlamento que refleja con bastante exactitud lo que votó la gente en general en toda Escocia. El SNP obtuvo casi la mitad de los votos —lo que será una cuestión crucial en las negociaciones— y casi la mitad de los escaños del Parlamento. Los conservadores, que son unionistas, lograron el 23,5% de los votos y el 24% de los escaños, y los laboristas, también unionistas, el 19% de la lista regional y el 17% de los escaños, mientras que los verdes obtuvieron el 8% de los votos y el 6% de los escaños. A la hora de la verdad, en estas elecciones no han variado mucho las cosas: solo han cambiado de partido tres de las 73 circunscripciones. Varios expertos en sondeos como John Curtice, de la

Universidad de Strathclyde, han dicho que, a pesar de la pandemia, lo que ha importado en estos comicios han sido los aspectos constitucionales. Y en eso, los votos nos han demostrado que los escoceses están divididos a partes iguales entre los que están a favor y los que están en contra de la independencia.

Ahora empiezan las discusiones. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que no se trata de saber “si, sino cuándo” se celebrará el segundo referéndum. Por su parte, Johnson se limita a repetir su afirmación de que sería “irresponsable y temerario” convocar un segundo referéndum de independencia. Una forma de superar este compás de espera sería que el SNP tomara las riendas y aprobara la ley de convocatoria del segundo referéndum en Edimburgo, sin esperar a la autorización legal de Londres. Cuando preguntaron a Nicola Sturgeon en una entrevista en la BBC si iba a presentar una ley sobre el referéndum ya en la próxima primavera —basándose en las predicciones de que, en el Reino Unido, para entonces, habrá disminuido la circulación del coronavirus y se habrá recuperado el PIB—, ella respondió: “Desde luego, eso vendría bien para poder cumplir el calendario en la primera mitad de la legislatura parlamentaria”. En tal caso, podría ocurrir que se acabe pidiendo a los tribunales que decidan si el Gobierno escocés tiene la potestad de celebrar un referéndum sin el consentimiento del británico. Nicola Sturgeon ha dicho que no cree que ninguna de las partes desee una batalla legal sobre este tema: “El Gobierno del Reino Unido sabe que, si alguna vez nos encontramos en una situación en la que los tribunales tengan que decidir, lo que este estará alegando es que Escocia no dispone de una vía democrática para lograr la independencia. Las repercusiones de esa postura serían muy graves. Si el argumento del bando unionista es que Escocia está atrapada sin salida, me parece que ese sería uno de los argumentos más fuertes en favor de la independencia”.

Entonces, ¿quién tiene la potestad de legislar la convocatoria de un nuevo referéndum? El Gobierno británico dice que, de acuerdo con la ley, Escocia necesita el permiso del Parlamento de Westminster, como sucedió con la primera consulta en 2014, cuando el Reino Unido autorizó al Parlamento escocés a decretar la convocatoria. El primer ministro Boris Johnson ha repetido una y otra vez que en esta ocasión va a rechazar toda petición en ese sentido. El SNP podría celebrar un referéndum basándose en los poderes que sí tiene. Sin embargo, Akash Paun, investigador del Institute for Government de Londres, dice que “cualquier intento de ese tipo seguramente acabaría bloqueado en los tribunales con el argumento de que estaría fuera de las competencias transferidas a Escocia. El Parlamento británico también podría rechazar directamente la posibilidad de un referéndum. En cualquiera de las dos situaciones, el SNP tendría poca o ninguna posibilidad de recurrir”. La consecuencia será una “guerra política de trincheras” entre ambos, asegura James Mitchell, catedrático de política en la Universidad de Edimburgo. En su opinión, el movimiento independentista planteará demandas enfurecidas y

utilizará las protestas callejeras y los golpes de efecto para subrayar que a Escocia “se le niega el derecho a decidir su futuro” mientras que, en paralelo, garantizará que su intención es alcanzar la independencia de forma legal. “Si no lo hacen así, perderían los apoyos y el reconocimiento internacionales en caso de que ganara la independencia”. Mitchell cree que Escocia no tiene la potestad de modificar la Constitución, porque es “materia reservada, es decir, que es competencia de Westminster”. Según la Ley Escocesa de 1998, que creó el Parlamento escocés, “la Unión de los reinos de Escocia e Inglaterra” es una materia reservada al Parlamento británico. Sin embargo, la profesora Aileen McHarg, experta en derecho constitucional en la Universidad de Durham, dice que en la interpretación de la ley no todo es blanco o negro: “La Unión es una materia reservada al Parlamento británico y todo lo que ‘está relacionado’ con una materia reservada también está reservado. Si interpretamos la Ley Escocesa al pie de la letra, un referéndum de independencia está relacionado con la Unión y por tanto es materia reservada. Sin embargo, ‘está relacionado con’ significa algo más que una conexión vaga o resultante. El argumento sería que un referéndum consultivo no tendría ninguna repercusión directa para la Unión (porque el resultado de la votación no sería legalmente vinculante) y, por tanto, la relación con la Unión es demasiado remota para entrar en el ámbito de la reserva”. De modo que “el pulso constitucional va a agudizarse e intensificarse”, cree Kirsty Hughes, directora del Centro Escocés de Relaciones Europeas.



No hay que olvidar la faceta política de este debate. Con una mayoría absoluta en el Parlamento escocés, el SNP tendría muchos más argumentos para exigir el segundo referéndum. Pero al partido le faltó un escaño para esa mayoría (64 y no 65, ¿recuerdan?) y algunas voces en Londres ya han apelado a esa cifra para justificar la negativa a otro referéndum. Sin embargo, Kirsty Hughes opina que la mayoría independentista del Parlamento hace inevitable la segunda consulta: “Las elecciones dieron una mayoría de 15 escaños al SNP y los Verdes y ese es un mandato claro para celebrar otro referéndum de independencia. Los votos por circunscripción personal y por listas, juntos, ofrecen un 50-50 entre los partidos favorables y opuestos a la independencia, lo que reflejaría bastante las encuestas de opinión actuales; aunque muchos votantes laboristas, en encuestas anteriores, también apoyaban la independencia. En general, creo que se piensa que tiene que haber y habrá otro referéndum de independencia, pero hay discrepancias sobre la fecha”. Para Akash Paun, la única forma de que el Reino Unido siga siéndolo es convencer a los escoceses de que sus intereses saldrán más beneficiados si se quedan que si se separan: “Al parecer, el Gobierno británico planea convencer a los escoceses invirtiendo más allí. ¿Servirá de algo? Desde luego, este parece pensar que, si gasta más dinero en Escocia, en infraestructuras y servicios públicos, podrá demostrar a los votantes la conveniencia de seguir formando parte de la Unión. Es posible que esta estrategia dé fruto, hasta cierto punto, pero el Gobierno debe estar dispuesto asimismo a reforzar los poderes del Parlamento escocés, por ejemplo dejando que recaude más dinero propio a través de impuestos y préstamos. La estrategia actual del primer ministro parece consistir en centralizar más poder en Westminster, y creo que, a largo plazo, eso puede ser contraproducente”.

¿Durante cuánto tiempo puede Londres seguir ignorando la cuestión del referéndum? James Mitchell opina que negarse indefinidamente a celebrar la nueva consulta seguramente “causaría resentimiento en Escocia y generaría más apoyos a la independencia, lo que pondría todavía más en peligro la supervivencia de la Unión. No estoy convencido de que vayamos a ver una situación similar a la de Cataluña, pero sí puedo imaginar el aumento de las presiones políticas hasta que Londres ceda y apruebe un referéndum, aunque lo normal es que el SNP no consiga todo lo que quiere en cuanto a la forma, la fecha y otros aspectos”. Escocia también podría seguir la “vía catalana” de celebrar un referéndum no aprobado por el Gobierno central. Aileen McHarg cree que Nicola Sturgeon no lo haría ahora que Alba, el nuevo partido de su predecesor Alex Salmond, no ha conseguido ningún escaño: “Me parece muy improbable. Nicola Sturgeon ha dicho repetidamente que no va a celebrar un referéndum ilegal. Alba estaba intentando empujarla a ser menos precavida. Ahora que ya no está, creo que mantendrá su cautela”.

De momento, los gobiernos de Londres y Edimburgo dicen que lo importante es sacar al país

de la pandemia y emprender la recuperación económica. Por tanto, a corto plazo, la cuestión del segundo referéndum no va a ser una prioridad para Escocia, pero pronto volverá a serlo. Para Kirsty Hughes, lo que hay que estudiar es si crece el apoyo a la independencia: “Si los apoyos son verdaderamente fuertes, es posible que los *tories* se encuentren con una dinámica política difícil de gestionar”. En cambio, James Mitchell cree que, a largo plazo, la llamada cuestión escocesa nunca podrá resolverse: “La geografía hace que, sea cual sea la situación constitucional de Escocia, necesitará mantener relaciones y vínculos estrechos con su vecino. Al margen del estatus legal oficial de Escocia, la relación no dejará de evolucionar y necesitará negociaciones y más negociaciones. Este debate proseguirá tanto si se convoca el referéndum como si no y voten como voten los escoceses. Por supuesto, un voto a favor de la independencia tendría peso, pero no sería la solución definitiva. Lo importante es si la relación continúa siendo el tema dominante, ya que suele tener altibajos”.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

Fecha de creación

12 mayo, 2021